

Doctor

JUAN PABLO DOSSMAN CORTEZ

Magistrado Ponente

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co

PROCESO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO

RADICACIÓN: 76001-23-33-000-2024-00650-00

DEMANDANTE: ALBA LUCIA MONTOYA JIMÉNEZ

DEMANDADO: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI

ASUNTO: DESCORRE A SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado especial de la **CÁMARA DE COMERCIO DE CALI**, conforme al poder que se aporta con este escrito, encontrándome dentro del término correspondiente; comedidamente procedo a **DESCORRER LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR** solicitada por la parte actora, la cual fue trasladada a mi procurada mediante auto de sustanciación No. 298 del 09 de los corrientes, notificado personalmente el 21 de julio de 2025; a lo cual procedo de conformidad con los argumentos fácticos y jurídicos que se esgrimen a continuación:

I. OPORTUNIDAD

El descorre de la solicitud de medida cautelar que se presenta a través de este memorial es procedente a la luz de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con el cual, el demandado contará con cinco (05) días para pronunciarse frente a la solicitud:

“(…) El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda (…). (Subrayado y negrillas y fuera de texto original)

En el presente caso, el auto de sustanciación No. 298 que corrió traslado de la solicitud de medida cautelar fue notificado personalmente el 21 de julio de 2025, por lo que los cinco (05) días de que habla la norma comenzaron a correr a partir del 22 de los corrientes, así: 22, 23, 24, 25 y **28 de julio de 2025**. Por lo tanto, este pronunciamiento se presenta dentro de la oportunidad procesal correspondiente.

II. DE LA SOLICITUD

La parte actora solicita que se declare la nulidad de la Resolución No. 17 del 11 de marzo de 2024 expedida por la Cámara de Comercio de Cali, mediante la cual rechaza el recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado por la señora Alba Lucia Montoya Jiménez, el 11 de marzo de 2024, contra la Resolución 23790 del 28 de diciembre de 2023, que es el acto mediante el cual se registró el Acta de Asamblea No. 02 del 21 de diciembre de 2023 de la SOCIEDAD MONTOYA SALDARRIAGA y CIA S. EN C. S., por ser este extemporáneo. De igual manera los solicitantes pretenden que se declare la nulidad de la Resolución 2024-01-217536, expedida el 16 de abril de 2024, mediante la cual la Superintendencia de

Sociedades confirmó la Resolución No. 17 referida anteriormente, y negó la procedencia del recurso de queja propuesto por la señora Alba Lucia Montoya Jiménez con ocasión de la negativa a tramitar el recurso de apelación presentado el 11 de marzo de 2024 presentado por la señora Montoya. Finalmente, a manera de “restablecimiento del derecho” se solicita que se declare la nulidad de la Resolución 23790 del 28 de diciembre de 2023 expedida por la Cámara de Comercio de Cali y que se declare la nulidad de los demás actos registrados ante esa cámara, y que se hayan derivado de la inscripción del acta.

En este sentido tenemos que los cuestionamientos a los actos se basan principalmente en que la parte actora considera que es ilegal que las entidades demandadas consideraran extemporáneos los recursos presentados por la señora Alba Lucia Montoya Jiménez el 11 de marzo de 2024 contra un acto administrativo expedido el 28 de diciembre de 2023, y fundan su consideración en que dicho acto (Resolución 23790) estaba suspendido con ocasión de que se había concedido contra él un recurso de apelación que fue presentado por la señora Beatriz Elena Montoya Jiménez el 28 de diciembre de 2023 y que se resolvió en segunda instancia por la Superintendencia de Sociedades el 11 de marzo de 2024.

En síntesis, los demandantes consideran que el efecto suspensivo en que se concedió el recurso de apelación presentado por la señora Beatriz Elena Montoya Jiménez, suspendió también los términos para presentar recursos frente al acto, situación que claramente compone un error de interpretación de la norma, pues dicha suspensión hace referencia a los **efectos** del acto frente a su eficacia, situación que nada tiene que ver con los términos para la presentación de los recursos ordinarios, los cuales están establecidos de manera taxativa por una norma particular, que para el caso es el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

En este contexto, la medida cautelar objeto de este escrito, pretende que se suspenda provisionalmente la Resolución 2024-01-217536 del 16 de abril de 2024 y consecuentemente “*se disponga que la Cámara de Comercio de Cali suspenda el registro del Acta de Asamblea No. 02 del 21 de diciembre de 2023 de la SOCIEDAD MONTOYA SALDARRIAGA y CIA S. EN C. S.*”, y es el aspecto sobre el que se abordará a continuación, anticipando que ello no puede considerarse procedente por el despacho, en la medida que no cumple con los requisitos del artículo 229 y siguientes de la Ley 1437 del 2011.

III. DE LOS REQUISITOS PARA DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES

Sea lo primero decir que el artículo 229 citado previamente, establece con claridad los supuestos de hecho y de derecho en los que se deben considerar procedentes las medidas cautelares en un proceso declarativo adelantado ante la jurisdicción administrativa. En ese sentido la norma expresa:

ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

Atendiendo esta situación desde ahora se puede decir que la medida cautelar solicitada carece de sustento, puesto que si lo que se pretende es que se deje sin efectos las decisiones de no atender recursos ordinarios porque fueron presentados extemporáneamente, no puede hablarse de relación sustancial con que se suspendan los efectos de la inscripción del Acta de Asamblea No. 02 del 21 de diciembre de 2023 de la SOCIEDAD MONTOYA SALDARRIAGA y CIA S. EN C. S.; y ello es así porque inclusive, si el despacho en una decisión desacertada decidiera decretar la medida cautelar de suspender provisionalmente la Resolución 2024-01-217536 del 16 de abril de 2024, lo único que procedería es que la Superintendencia de Sociedades estudie el recurso de súplica interpuesto por la señora Alba Lucia Montoya Jiménez.

Así lo ha manifestado el Consejo de Estado en Sentencia de expediente No. 54850, proferida el 29 de marzo de 2016 con ponencia del doctor Danilo Rojas Betancourt, en la cual manifiesta:

*El capítulo XI del Título V del CPACA regula las medidas cautelares en los procesos contencioso administrativos, al establecer en su artículo 229 que en todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. (...) Por su parte, el artículo 230 ibídem dispone que las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y que deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, luego de lo cual establece aquellas que el juez podrá decretar. (...) Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, **la norma establece que el juez no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto, en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.** (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

Ahora bien, a pesar de ello, el hecho de que el despacho decidiera -hipotética y erradamente- que la Superintendencia debe estudiar el recurso referido y conceder la cautelar, ello no tiene por qué implicar que le conceda las pretensiones en él deprecadas acerca de la inscripción del acta de que trata este caso, lo cual se soporta en que el estudio tanto formal como material de los recursos ordinarios que sobre esa inscripción procedían, ya se adelantó por las entidades accionadas tras la reposición y apelación presentadas por la señora Beatriz Elena Montoya Jiménez, frente a las cuales se denegaron las pretensiones tanto en primera instancia por mi representada, como en segunda instancia por la Superintendencia de Sociedades, por lo que -aun si se estudiará el recurso de súplica (que es el objeto de la solicitud de medida cautelar)- no se modificaría la validez de la inscripción del acta No. 02, que es -a fin de cuentas- el objeto del proceso, y ello implicaría que no se cumple con el requisito de procedencia de la medida cautelar porque esta no tendría relación sustancial con el objeto del proceso.

Aunado a ello tenemos que el artículo 231 ibídem, establece los requisitos necesarios para que se pueda decretar una medida cautelar en un proceso como el que nos ocupa. En este sentido la norma reza:

*REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES. **Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos** (...) (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

En este contexto, para que se pueda decretar la medida cautelar pretendida, tenemos que en primera medida debería existir una violación de las normas que soportan la demanda, que como se dijo arriba, en este caso dicha vulneración se da -según la parte actora- porque los actos demandados negaron darle procedencia a unos recursos (apelación y queja) por extemporáneos, y argumentan dicha posición bajo el supuesto que los términos para dichos recursos deberían empezar a contar a partir de la fecha en que adquirió firmeza el acto y no desde la notificación (personal, por aviso o al vencimiento del término de publicación), lo cual constituye un error de bulto, pues el artículo 76 del estatuto adjetivo indica:

*OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación **deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso.** Los*

recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Salta a la vista que la norma no hace ninguna referencia a que dichos términos se extiendan a los supuestos temporales en que el momento de la firmeza del acto se diferencie del momento de su notificación o publicación, y ello es así porque el efecto suspensivo del que pretende valerse la parte demandante para extender en el tiempo la posibilidad de cuestionar los actos administrativos, no hace referencia a la suspensión de términos frente a los recursos, sino a la suspensión de los efectos del acto, frente a su eficacia, error que a su vez hace que el argumento central del cuestionamiento de la demanda, desaparezca, y por tanto, que no haya motivo para considerar procedente la medida cautelar, por no encontrarse demostrada ni jurídicamente viable la violación de las normas sustento de la demanda.

Aunado a ello tenemos que, como segunda medida, la norma exige que cuando se pretende el restablecimiento del derecho, el cual está necesariamente ligado a la existencia de perjuicios o daños particulares, deberá demostrarse uno y otro aspecto. En este caso ni siquiera podemos hablar de que exista un derecho que restablecer, pues vemos que, en la reforma de la demanda, se pide que a manera de “restablecimiento del derecho” se declare la nulidad otros actos administrativos, véase:

Que, consecuencia de las anteriores declaratorias, a título de restablecimiento del derecho se declaren la nulidad de:

- a. El acto administrativo 23790 del 28 de diciembre 2023 que dispuso la inscripción del Acta 02 del 21 de diciembre 2023 de la sociedad MONTOYA SALDARRIAGA Y CIA S. EN C.S.
- b. La nulidad de los demás actos de registrados ante la Cámara de Comercio de Cali de la sociedad MONOTYA SALDARRIAGA Y CIA S. EN C.S. que se deriven de la inscripción del Acta 02 del 21 de diciembre 2023.

Con estas solicitudes es claro que lo que se pretende por los actores es revivir el término que tenían para cuestionar el acto administrativo que inscribió el Acta de Asamblea No. 02 del 21 de diciembre de 2023, es decir la Resolución 23790 de 28 de diciembre de 2023, lo cual transgrede la intención de la norma, pues si se llegase a aceptar una situación así, se estaría declarando la nulidad de un acto (Resolución 23790) sin que se le hiciese el estudio necesario para determinar si está o no en contra de norma superior alguna o si se vulneraron derechos particulares, pues dependería del estudio de nulidad de otros actos que nada tienen que ver con su contenido sustancial o formal, como lo son las Resoluciones Nos. 17 del 11 de marzo de 2024 expedida por la Cámara de Comercio y la Resolución No. 2024-01-217536 expedida por la Superintendencia 16 de abril de 2024, sobre las que, como se dijo, sólo se les cuestiona no haber atendido recursos que fueron presentados extemporáneamente, por lo que de su estudio no podría determinarse si la plurimencionada inscripción del acta, estaba viciada en forma alguna de nulidad, lo que además deja en evidencia que la afectación que se debió solicitar y demostrar para la procedencia de la medida cautelar, era la existencia de una afectación al debido proceso por la no procedencia de los recursos, cosa que tampoco sucedió; y en este contexto, es imposible que pueda hablarse de que el objeto del restablecimiento del derecho está -aunque sea- sumariamente probado, porque ni siquiera existe. Realmente su solicitud comporta una suerte de “táctica” para cuestionar un acto para el que los términos ya habían fenecido al momento de la presentación de la demanda.

Con las anteriores consideraciones es claro que el juzgador de instancia no tendrá posibilidad diferente que denegar la solicitud de medida cautelar, y en tal sentido me permito presentar la siguiente:

IV. SOLICITUD

PRIMERA: Solicito con todo respeto, **NEGAR** por improcedente la medida cautelar solicitada por la parte demandante y agotar el procedimiento previsto respecto del medio de control incoado, buscando con ello que se garantice el debido proceso, y por ende el derecho de contradicción a la generalidad de partes e intervinientes.

V. ANEXOS

1. Poder especial de representación a mí conferido.
2. Certificado de existencia y representación legal de mi representada.
3. Documento de identidad y tarjeta profesional del suscrito apoderado.

VI. NOTIFICACIONES

Mi poderdante y el suscrito recibiremos notificaciones en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212, de la ciudad de Cali, o en la dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co

Atentamente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.